

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - ORAL
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO No:	11001-33-35-029-2020-00151 00
DEMANDANTE:	JHON DREDY PEÑA LEÓN
DEMANDADO:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL
CONTROVERSIA:	EJECUTIVO LABORAL

Visto el informe secretarial que antecede, procede el Despacho a resolver lo pertinente respecto del recurso de Reposición en subsidio de Apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutante en contra de la decisión adoptada el 09 de febrero de 2023, previo las siguientes:

I. ANTECEDENTES

Esta Sede Judicial mediante auto de fecha 09 de febrero de 2023, negó la solicitud de medida cautelar presentada por el apoderado de la parte ejecutante al considera que la misma, se torna improcedente bajo el entendido que no existe fundamento legal que autorice el embargo de los bienes y recursos de la entidad ejecutada – conforme a lo establecido en el artículo 594 del Código General del Proceso y teniendo en cuenta la jurisprudencia del H. Consejo de Estado – citada en el aludido auto.

El apoderado de la parte ejecutante, mediante memorial radicado el 15 de febrero de 2023 – procede a sustentar recurso de Reposición en subsidio de Apelación en contra del auto de fecha 09 de febrero de 2023.

Del recurso de Reposición

El apoderado de la parte ejecutada, interpone recurso de Reposición en subsidio de Apelación en contra del auto de fecha 09 de febrero de 2023 – a través del cual denegó la solicitud de la medida cautelar de embargo de las cuentas bancarias del Ministerio de Defensa, considerando que el Despacho no tuvo no tuvo en cuenta que el objeto del presente proceso ejecutivo es el cumplimiento de una sentencia

judicial que ordenó el pago de una prestación de origen laboral – donde dicho objeto se presenta como una excepción al principio de inembargabilidad desarrollada por la jurisprudencia, dado que, según lo contemplado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, la prohibición de embargo pierde su fuerza al no operar como un principio absoluto y suficiente, toda vez que la entidad deudora no ha adoptado las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia.

Agrega que, el Despacho desconoció que el decreto de la medida cautelar funge como única garantía de la deuda de origen laboral que la entidad ejecutada tiene en favor del demandante – desconociendo los derechos fundamentales a la Igualdad, la dignidad humana y al trabajo del demandante – al no tener un mecanismo distinto a ese para garantizar el cumplimiento del pago ordenado en la sentencia y, además que, no se tomó en consideración a lo señalado por la H. Corte Constitucional – en el que precisa que existen 3 excepciones frente a la aplicación del principio de inembargabilidad, las siguientes: “i) la primera que surge cuando es necesario cancelar créditos u obligaciones de origen laboral; ii) la segunda tiene que ver con el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos en ellas reconocidos; iii) y la tercera se origina en los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible, tal como se evidencia en Sentencias C-546 de 1992, C-354 de 1997, C-566-2003, C-154 de 2008, y C-539 de 2010, especialmente en Sentencia T-873 – 2012, que sostiene:

“(...) las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos públicos comprendía: (i) la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas; (ii) la importancia del oportuno pago de sentencias judiciales, para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias; y (iii) el caso en que existieran títulos emanados del Estado que reconocieran una obligación clara, expresa y exigible.” (Negrilla y subraya fuera de texto)

Asimismo, indicó que si bien el artículo 594 del CGP – aducido para negar la medida cautelar de salvaguardar los bienes del presupuesto general, dicha postura no obsta para que se adopten las medidas cautelares para garantizar el pago de la sentencia condenatoria a cargo de la entidad demandada, dado que la aplicación de dicha normatividad cede cuando se trata de satisfacer ciertas obligaciones y si éstas son de origen laboral, se derivan de sentencias judiciales o constan títulos emanados de la administración, como se observa en precedencia y, que desconoció la legislación interna, especialmente los artículos 597 y 599 del CGP.

De conformidad con lo expuesto, solicita reponer el auto de 09 de febrero de 2023 en el sentido de decretar la medida cautelar y en caso de no proceder el recurso de reposición, solicita conceder de manera subsidiaria el recurso de Apelación.

II. CONSIDERACIONES

En contra del referido auto y de conformidad con el artículo 242 de la ley 1437 de 2011 – modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2020, establece que “El recurso de Reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso”.

En virtud de lo anterior, el artículo 318 del Código General del Proceso en su Inciso 3°, precisa lo siguiente:

“El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie del auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes al de la notificación del auto”.
(Subrayado fuera del texto)

De conformidad con lo expuesto, se tiene que el recurso debe interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto y, teniendo en cuenta que el auto recurrido que notificado por estado el 10 de febrero de 2023, la parte ejecutada tenía hasta el 17 de febrero de 2023 para presentar el recurso de Reposición y dado que el mismo fue interpuesto el **15 de febrero de 2023**, se encuentra dentro del término establecido para tal fin; razón por la cual, procede esta sede judicial a resolver lo pertinente.

Ahora bien, el artículo 243 ibídem, expone un listado de las providencias que son susceptibles de ser recurridas a través de apelación, señalando para tales efectos las siguientes:

“Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:

1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.

2. *El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.*
3. *El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El auto que aprueba una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público.*
4. *El que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios.*
5. **El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.**
6. *El que niegue la intervención de terceros.*
7. *El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.*
8. *Los demás expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial.*

Parágrafo 1°: *El recurso de apelación contra las sentencias y las providencias listadas en los numerales 1 a 4 de este artículo se concederá en efecto suspensivo. La apelación de las demás providencias se surtirá en el efecto devolutivo, salvo norma expresa en contrario.
(...)"*

El apoderado de la parte ejecutante, solicita que se reponga el auto de fecha 09 de febrero de 2023 – a través del cual negó el decreto de la medida cautelar de embargo de las cuentas bancarias del Ministerio de Defensa – al considerar que el Despacho desconoce la excepción de inembargabilidad de los bienes y recursos públicos en procesos y que no tomó en consideración lo precisado por la H. Corte Constitucional – en el que señala que existen 3 excepciones frente a la aplicación del principio de inembargabilidad, como las siguientes: "(...) las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos públicos comprendía: (i) la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justa; (ii) la importancia del oportuno pago de sentencias judiciales, para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencia; y (iii) el caso en que existieran títulos emanados del Estado que reconocieran una obligación clara, expresa y exigible." (Negrilla y subraya fuera de texto)"

De acuerdo a lo anterior, solicita reponer el auto de fecha 09 de febrero de 2023 y en el sentido de decretar la medida cautelar solicitada o en su defecto conceder de manera subsidiaria el recurso de Apelación planteado.

En virtud de lo expuesto, para el Despacho no es dable los argumentos expuestos por el recurrente, comoquiera que (se reitera) no es procedente decretar la medida cautelar de embargo de las cuentas bancarias del Ministerio de Defensa, teniendo

en cuenta que no encuentra fundamento legal que autorice el embargo de los bienes y recursos de propiedad de la citada entidad ejecutada al tratarse de recursos inembargables de conformidad con lo establecido en el artículo 594 del Código General del Proceso y teniendo en cuenta lo precisado por el H. Consejo de Estado – citada en auto del 09 de febrero del presente año.

En este orden de ideas, no encuentra el Despacho argumentos suficientes para revocar la decisión que se tomó mediante el auto de fecha 09 de febrero de 2023, por medio del cual negó el decreto de la medida cautelar solicitada por la parte ejecutante.

De otra parte y teniendo en cuenta que, el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutante fue sustentado oportunamente contra del aludido auto de fecha 09 de febrero de 2023, **concédase en el efecto devolutivo** y ante el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca - de conformidad con lo normado en los artículos 243 del C.P.A.C.A.

Por lo anteriormente expuesto, este Despacho

RESUELVE:

PRIMERO: NO REPONER el auto emitido el 09 de febrero de 2023, por medio de la cual negó la solicitud de medida cautelar de embargo presentada por el apoderado de la parte ejecutante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONCEDER el recurso de Apelación en efecto **devolutivo** interpuesto por la parte ejecutante en contra del auto de fecha 09 de febrero de 2023 – que negó la solicitud de medida cautelar de embargo, de acuerdo a lo señalado en precedencia.

TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 243 del CPACA, se ordena por Secretaría, **REMITIR** el expediente de la referencia al **H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA** para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ENRIQUE ARCOS ALVEAR
JUEZ

RYGH

JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

Por anotación en ESTADO notifico a las partes la providencia anterior

Hoy 28 de abril de 2023 a las 8:00 a.m.

PARTES	CORREO ELECTRÓNICO
APODERADO DEMANDANTE:	jhonfredy8074@hotmail.com jamberacero@yahoo.es kginneth.06@gmail.com asistentejuridico@cesaraceroabogados.com
APODERADO DEMANDADA:	germanlojedam@gmail.com notificaciones.Bogota@mindefensa.gov.co juridicadisan@ejercito.mil.co manuel.cardenas@mindefensa.gov.co manucarlyele@gmail.com
M. PÚBLICO: PROCURADOR 191 JUDICIAL PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	procjudadm191@procuraduria.gov.co